



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN

CASACIÓN

Provincia de Tucumán, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios, integrada por el señor Vocal doctor Daniel Leiva, las señoras Vocales doctoras Claudia Beatriz Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y el señor Vocal doctor Antonio D. Estofán -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Leiva, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: ***“Provincia de Tucumán vs. Horbet S.A. s/ Contencioso Administrativo”***.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctoras Eleonora Rodríguez Campos, Claudia Beatriz Sbdar, doctor Daniel Leiva y doctor Antonio D. Estofán se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora Vocal doctora Eleonora Rodríguez Campos, dijo:

I.- La parte actora presenta recurso de casación contra la sentencia n° 745 del 08 de agosto de 2023 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el artículo 808 *in fine* del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante resolución n° 980 del 03 de octubre de 2023.

II.- Al ser inherente a la competencia funcional de esta Corte, como tribunal del recurso de casación, revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el *A quo*, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 808 del CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los

términos del artículo 805 inciso 1 del CPCyC; cumple con el depósito previsto por el artículo 809 del CPCyC; y satisface el requisito del artículo 807 del CPCyC, en la medida que está fundado en una supuesta arbitrariedad por parte del fallo en cuestión.

Por lo señalado el recurso resulta admisible y, siendo ello así, corresponde abordar su procedencia.

III.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis rechazó la demanda incoada por la Provincia de Tucumán en contra de la empresa Horbet SA, en la cual la parte actora solicitó que se declare la nulidad de la Resolución n° 105/20 del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Tucumán.

Para así decidir, la Cámara recordó que la pretensión de la Provincia en este expediente se encamina a obtener la declaración de nulidad de la resolución por la cual el Tribunal Fiscal declaró prescriptas a favor de la empresa demandada las facultades de determinación y cobro del Fisco Provincial respecto del período fiscal 2012 y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de la DGR de ajustar el saldo a favor declarado por el contribuyente para por ese período prescripto.

En lo que es materia de agravio, el Tribunal sentenciante manifestó que, dejando a salvo su propia opinión respecto del carácter anual del impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a la resolución de la Dirección General de Rentas, tal como ha sido descripta por el Tribunal Fiscal, el plazo de prescripción para el período fiscal 2012 se concretó o llegó a su término durante el decurso del trámite recursivo recaído en sede administrativa.

La Sala explicó que el plazo de prescripción correspondiente a dicho período fiscal, al momento de la impugnación y deducción del recurso de apelación por parte del contribuyente, aún no se encontraba cumplido; hito éste que ocurrió con posterioridad. Advirtió además que la Provincia no ha invocado que el plazo de prescripción correspondiente a dicho período hubiera sido interrumpido por alguno de los medios que la ley vigente prevé a tal fin. Siendo de esta manera, concluyó que no existe óbice alguno para considerar prescriptas las potestades fiscales atinentes a dicho período; puesto que no se verifica la existencia de ninguna acción de la Provincia tendiente a mantener a resguardo aquellas facultades.

El pronunciamiento impugnado descartó el planteo de la actora respecto a que, aún considerando que el contribuyente se hubiera visto beneficiado por la prescripción liberatoria respecto de ciertas posiciones fiscales, sus potestades de verificación fiscal se mantienen incólumes en relación a aquellos períodos prescriptos, todo a los fines de indagar la

procedencia del saldo a favor que se pretende imputar a las posiciones no prescriptas; todo ello en virtud de lo dispuesto en la parte final del inciso 1 del artículo 9 de la Ley 5121. La Cámara consideró que la intención de supervivencia de las potestades de verificación sobre períodos fiscales prescriptos son improcedentes y se contradicen con la normativa aplicable al caso. En tal sentido, continuó, la regla vigente para este caso mandaba aplicar la legislación de fondo en orden a la prescripción liberatoria en materia tributaria local, sin efectuar distingo alguno en relación a tal o cual potestad, es decir, ya sea de determinación, verificación o pago. El Tribunal consideró que las potestades de verificación son susceptibles de prescribir en idénticos términos a las potestades de determinación fiscal y pago, sin que exista ninguna norma en la legislación local o de fondo que autorice el renacimiento de las potestades de verificación contra potestades prescriptas en los casos que el contribuyente pretenda imputar saldos favorables.

A lo antedicho añadió que la solución que propicia la actora luce irrazonable e implicaría una solución absurda para el contribuyente y que además afectaría derechos ya adquiridos por éste e incorporados a su patrimonio. La Cámara sostuvo que la posición de la Provincia implicaría revivir para la DGR la posibilidad de revisar un saldo a favor histórico, disminuyéndolo hacia el futuro, lo cual constituye una determinación fiscal solapada que desconoce la incidencia de la prescripción ya sucedida. El Tribunal consideró que la hipótesis planteada por la Provincia supone no sólo un ajuste o determinación fiscal, sino además la imputación de un pago con relación a una posición en la que esas potestades fiscales se encuentran prescriptas. Explicó que la disminución del saldo a favor imputado por el contribuyente implica, en el ejemplo anterior, el examen del impuesto declarado para la posición prescripta, su desconocimiento por parte del fisco y el posterior ajuste del gravamen elevando su cuantía con la consecuente disminución del saldo a favor declarado. Todo ello, en opinión de la Cámara, cuando las potestades de determinación fiscal se encontraban prescriptas en lo concerniente a ese período fiscal.

La Sala sentenciante afirmó que, en la inteligencia que propone la Provincia, aquel contribuyente que ha beneficiado al Fisco con el ingreso anticipado de valores en exceso en concepto del impuesto y que pretende su aplicación en el futuro, nunca se vería beneficiado de las bondades de la prescripción liberatoria, puesto que su imputación de saldos favorables posterior haría renacer facultades de determinación fiscal y de pago ya prescriptas.

IV.- La Provincia de Tucumán sostiene que la sentencia impugnada resulta arbitraria por haber desatendido la normativa aplicable al caso, por haber eludido los antecedentes obrantes en autos y por

haber desoído la doctrina judicial imperante en la materia.

Aduce que la Cámara desconoce el sentido y alcance del art. 9, inc. 1 de la Ley 5.121 y sus modificatorias, dejando de lado la letra de la ley. Recuerda que de acuerdo al art. 8 del Código Tributario la autoridad de aplicación se encuentra dotada de ciertas facultades, enumeradas en el art. 9, inc. 1, de entre las que destaca que “podrá también exigir que los contribuyentes y responsables otorguen determinados comprobantes y conserven sus duplicados, así como los demás documentos y comprobantes de sus operaciones hasta cinco años después de operada la prescripción del período fiscal al que se refieren”. De acuerdo a su criterio, como contracara de esa facultad, nace el deber del contribuyente de conservar y poner a disposición del órgano fiscal hasta dentro del plazo de cinco años después de operada la prescripción del período fiscal al que se refieren.

Sostiene que la Cámara desconoce no sólo la finalidad de la norma sino la voluntad legislativa expresa, que es la de dotar al fisco de la facultad de verificación de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes sobre períodos ya prescriptos, evitando con ello la evasión fiscal que puede producirse frente a un impuesto de tipo declarativo, como es el impuesto sobre los ingresos brutos. Es decir, el fisco cuenta, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 9, inc. 1 del CTP con la posibilidad de verificar, dentro de un marco temporal determinado, la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes que pudieran incidir sobre períodos no prescriptos, sobre los cuales tiene la facultad de exigir el ingreso del tributo respectivo.

El recurrente afirma que la sentencia es arbitraria, puesto que contradice las constancias de autos, desatiende la verdad formal del expediente y no tiene en cuenta cuestiones de hecho acreditadas en autos. Explica que la Cámara ha desatendido cuestiones puntuales que demuestran el correcto accionar del fisco, tanto en su verificación administrativa como en su posterior reclamo judicial, colocándolo en un estado de desigualdad e indefensión frente a las decisiones adoptadas por el Tribunal Fiscal.

Alega que, encontrándose el expediente ante el Tribunal Fiscal, el Fisco se presenta ya como parte y no como Juez del caso, encontrándose desprendido de toda competencia para su solución. En ese contexto, desde su perspectiva, radicadas las actuaciones ante el Tribunal Fiscal, la DGR debía esperar la solución de la materia, estando amparada necesariamente en ese lapso de tiempo por la dispensa de la prescripción prevista por el art. 2550 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Explica que, una vez resuelto el caso y dentro del

plazo de caducidad de quince días dispuesto en el art. 158 del Código Tributario Provincial (en adelante, CTP) y por supuesto dentro del plazo de seis meses previsto en el Código Civil y Comercial, se interpuso la demanda contenciosa pertinente. Siendo así, concluye que existió sobre la DGR una dispensa de prescripción soslayada por la sentencia.

V.- ¿Asiste razón a la recurrente, parte actora en autos?

V.1.- Analizadas las cuestiones planteadas por la actora en su recurso, y confrontadas las constancias del expediente, se advierte que el recurso no puede prosperar.

Desde mi punto de vista, la decisión de la Cámara de rechazar esta demanda planteada por la Provincia de Tucumán es correcta y es la solución que debe darse a este caso. Sin embargo, considero que tal rechazo debe sustentarse en motivos diferentes a los expuestos por la sala sentenciante. En razón de ello, y en ejercicio de la atribución soberana que, en tanto órgano jurisdiccional, tiene este Tribunal para asignarle a la relación substancial la calificación que le corresponda y fijar la norma legal que debe aplicarse al caso (cfr. art. 128 CPCyC), corresponde confirmar el rechazo de la demanda y, por ende, rechazar el recurso de la parte actora, por los motivos que se exponen a continuación (en similar sentido, cfr.: CSJT, sent. n° 797 del 28-06-2023, “Atanor S.C.A. vs. Provincia de Tucumán-DGR s/inconstitucionalidad”; CSJT, sent. n° 648 del 05-09-2011, “Budeguer Juan José vs. Superior Gobierno de la Provincia-DGR s/nulidad-revocación”; sent. n° 488 del 22-06-2012, “Veliz Marcela del Valle vs. IPSST s/amparo”; sent. n° 505 del 30-07-2013, “M&A Representaciones SRL vs. Municipalidad de Concepción s/acción declarativa de inconstitucionalidad”; sent. n° 611 del 21-08-2013, “Visión Express Argentina SA vs. Provincia de Tucumán-DGR s/nulidad-revocación”, entre muchas otras).

V.2.- De acuerdo a las constancias de autos, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán emitió unas Actas de Deuda por las cuales determinó un ajuste contra Horbet SA respecto del impuesto sobre los ingresos brutos.

Disconforme, el contribuyente interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 134, inc. 2 de la Ley 5121 ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones. Dicho órgano decidió la apelación mediante sentencia n° 105/20 del 22 de junio de 2020, y, de acuerdo a lo expuesto en la demanda, el Tribunal Fiscal notificó oportunamente dicha decisión a la Dirección General de Rentas de la Provincia.

Contra esta decisión la Provincia de Tucumán plantea esta demanda solicitando que “se declare la nulidad y se revoque el

Punto 1 de la Resolución n° 105/20 del 22/06/2020 emanada del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Tucumán”.

Desde mi punto de vista, la Provincia de Tucumán carece de acción para plantear la nulidad de las decisiones que, en el marco de la vía administrativa previa que es necesario agotar para habilitar la instancia judicial, adopten los órganos de la propia administración que viene ahora a juicio. Con prescindencia de la corrección o incorrección jurídica de los fundamentos expuestos por la Cámara para decidir la cuestión relativa al alcance de las facultades que el Fisco invocó al amparo del art. 9, inc. 1 del CTP y de la adecuada interpretación de dichas facultades en conjunción con el régimen de prescripción establecido en el art. 54 del CTP vigente al momento de los hechos que dieron motivo a esta demanda, lo cierto es que la Provincia de Tucumán no tiene un interés jurídico tutelable que le permita demandar en sede judicial la anulación de una decisión del Tribunal Fiscal de Apelaciones que benefició a un determinado contribuyente.

Cabe aclarar que toda cuestión relativa a la falta de acción de las partes para estar en juicio debe ser analizada de oficio en cualquier instancia del juicio, puesto que hace a la adecuada constitución del proceso y, además, es inherente a la regular prestación del servicio de justicia, en cuya consecución está comprometida la comunidad toda. Sobre una cuestión similar, esta Corte tiene dicho que “la falta de acción o legitimación para obrar, abarca circunstancias en las que el accionante carece de un interés jurídico tutelable (Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, Ed. 1990, Tomo VI, pág. 132)” (CSJT, sent. n° 371 del 29/05/2015), por lo que incide directamente sobre la eficiencia de la administración de justicia, razón por la cual los jueces se hallan habilitados para declarar, de oficio, la concurrencia de aquéllas en el caso concreto (CSJT, sent. n° 182 del 02/03/2018)”. (CSJT, sent. n° 370 del 30-04-2021, “Grandes Bazares del Norte S.A. c/ Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación”).

La carga de los particulares de agotar la vía administrativa previa (tanto por vía de reclamo como por vía recursiva) hasta lograr un acto que cause estado, es un privilegio de la administración que permite someter a su propia evaluación y decisión los planteos fundados en derecho que los particulares tengan para hacer respecto de los actos que dicta la administración, reconociendo con ello el carácter especial que tiene el Estado cuando es traído a juicio. Es por ello que la intervención judicial respecto de los actos de la administración requiere de la habilitación de la instancia judicial a través del agotamiento de la instancia administrativa previa (art. 12, Código Procesal Administrativo).

Ahora bien, la obligación de agotar la vía administrativa es una carga para el contribuyente que debe interponer los recursos necesarios para evitar la firmeza del acto que cuestiona (art. 41, inc. 2, CPA) y, obtenida la decisión final de la administración, plantear dentro del correspondiente plazo de caducidad (art. 9, CPA) la demanda de anulación del acto administrativo que cuestione.

Pero esa carga que pesa sobre el particular requiere, como requisito lógico y pragmático, que la propia administración acepte el resultado material al que se arriba tras la revisión interna de sus propias decisiones; dejando a salvo, claro está, ciertos supuestos excepcionales como la acción de lesividad para los actos anulables o el contencioso expropiatorio.

Es decir, el agotamiento de la vía administrativa para obtener una decisión expresa de la máxima autoridad jerárquica constituye una carga que pesa sobre los administrados, quienes se ven impedidos de discutir directamente ante el Poder Judicial las controversias que mantengan con la Administración y deben recorrer toda la vía recursiva antes mencionada. Pero una vez obtenida una decisión de la máxima autoridad administrativa que, precisamente por serlo, agota la vía para el particular, no tiene absolutamente ningún sentido permitir a la propia administración que discuta en juicio la decisión que adopta internamente y que, en el marco de su organización doméstica, otra área decida impugnar el contenido de la decisión adoptada. Sobre una cuestión similar, esta Corte ha reconocido que si bien “el Tribunal Fiscal ejerce funciones materialmente jurisdiccionales ... no puede perderse de vista que se trata de un órgano de la propia administración demandada, que pertenece y se funde íntegramente en la personalidad jurídica pública de la administración.” (CSJT, sent. n° 720 del 24-05-2024, “María Angela Uña de Carletto e Hijos SA vs. Provincia de Tucumán s/nulidad-revocación”, expte n° 240/20).

Es ampliamente reconocido que los fines que se persiguen con la exigencia del agotamiento de la vía administrativa se vinculan con la necesidad de brindar a la Administración una oportunidad de auto control para que revise la legitimidad de sus actos y, eventualmente, corrija sus errores; la de evitar que la administración sea llevada a juicio por decisiones de sus órganos inferiores y con la de reducir el número de casos que lleguen a la instancia judicial dándoles solución mediante un mecanismo ágil, rápido e informal. Ese es el sentido de la exigencia de interposición de los recursos de reconsideración (art. 63, Ley 4537), jerárquico (art. 67, Ley 4537) y de alzada (art. 68, Ley 4537) en el ámbito general de la administración.

En el caso especial de la administración tributaria, la ley aplicable estimó pertinente organizar los órganos de la administración

tributaria de manera parcialmente diferente al diseño general de impugnaciones consagrado en la Ley de Procedimientos Administrativos n° 4537. En efecto, de acuerdo al Título II de la Ley 5121 son órganos de la Administración Tributaria tanto la Dirección General de Rentas (Título II, Capítulo I, art. 8) como el Tribunal Fiscal (Título II, Capítulo II, art. 12). En el marco de esta organización especial nacida de las peculiaridades de la materia tributaria, la Ley 5121 tiene previsto el agotamiento de la vía administrativa a través de la interposición de los recursos de reconsideración ante la autoridad de aplicación (art. 134, inc. 1, Ley 5121) y de apelación ante el Tribunal Fiscal (art. 134, inc. 2, Ley 5121), el cual agota la vía administrativa tributaria y contra la cual puede interponerse la demanda correspondiente ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo (art. 158, Ley 5121).

Pero “la demanda correspondiente” que el Código Tributario Provincial autoriza a interponer ante el fuero contencioso administrativo sólo puede ser deducida por los sujetos alcanzados por la carga de agotar la vía administrativa para habilitar la instancia judicial, es decir, los contribuyentes impugnado actos administrativos que alegan lesivos de sus derechos subjetivos o intereses legítimos. La revisión del acto dictado en el marco de las facultades de auto control que ejerce la Administración por la vía recursiva impuesta como carga a los particulares implica un control de legalidad y legitimidad realizado en sede administrativa por la propia Administración y como manifestación de sus propias potestades y privilegios procesales.

Si la administración decidió que el acto que cause estado y, por ende, ponga fin a la vía administrativa provenga de un determinado órgano (en este caso, el Tribunal Fiscal, en virtud del art. 158, Ley 5121) y no de otro (por ejemplo, el Poder Ejecutivo en virtud del art. 68, Ley 4537), ello no autoriza a la administración a cuestionar judicialmente el acto que causó estado porque en definitiva y por definición se trata de su propia decisión. Pero sin una habilitación legislativa expresa que autorice tal actuación jurisdiccional de naturaleza excepcional (tal como, por ejemplo, existe a nivel nacional en el art. 193 de la Ley 11.683), la única conclusión a la que puede arribarse es que la Administración provincial carece de acción para cuestionar sus propias decisiones.

VI.- En virtud de lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia n° 745 del 08 de agosto de 2023 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

VII.- En atención al resultado al que se llega y en virtud del principio general que sobre la materia consagra el art. 61 del CPCyC (art. 105, Ley 6176), corresponde sean soportadas por la recurrente las costas

concernientes a esta instancia extraordinaria local..

La señora Vocal doctora Claudia Beatriz

Sbdar, dijo:

1. Comparto y adhiero a la reseña de los antecedentes de la causa y al juicio de admisibilidad del voto de la vocal preopinante, doctora Eleonora Rodríguez Campos, apartados I, II, III y IV.

2. Las cuestiones planteadas por la recurrente en la presente causa resultan sustancialmente análogas a las consideradas y resueltas recientemente por esta Corte en autos “María Ángela de Uña de Carletto e Hijos S.A. vs. Provincia de Tucumán - D.G.R. s/ Nulidad/Revocación”, sentencia N° 720 del 24/5/2024, a cuya totalidad de fundamentos y conclusiones corresponde remitir, en lo pertinente, por razones de brevedad. En esa oportunidad, este Tribunal consideró que la Cámara “realizó un esfuerzo de interpretación armónica en donde puso de relieve la dificultad que implicaba admitir la propuesta interpretativa de la demandada: permitir que, al amparo de las facultades conferidas a la autoridad de aplicación en el art. 9 del CTP, el Fisco verifique la procedencia de un ajuste que el contribuyente alega a su favor en una posición que se consideró ya prescripta en virtud de lo dispuesto por el art. 54 del CTP implicaría hacer renacer una facultad prescripta y alterar los alcances con los que la prescripción se incorporó al patrimonio del deudor a quien la prescripción benefició (...). Por otro lado, desde un punto de vista de técnica de interpretación normativa, el argumento de la demandada se desentiende precisamente de la necesidad de adecuación que es necesario realizar sobre la interacción armónica entre las diversas disposiciones del Código Tributario Provincial. La Cámara interpretó, adecuadamente a mi modo de ver, que las facultades otorgadas a la autoridad de aplicación en el art. 9 del CTP respecto de operaciones que tuvieron lugar 'hasta cinco años después de operada la prescripción del período fiscal a que se refieren' sólo pueden ser ejercidas respecto de aquellas obligaciones tributarias sobre las cuales el fisco conserve aún facultades de fiscalización o verificación, y sin que haya operado a su respecto la prescripción prevista en el art. 54 del CTP. En efecto, la única vía interpretativa que permite entender la interacción entre las facultades acordadas a la autoridad de aplicación en el art. 9 con la prescripción prevista en el art. 54 es la de juzgar admisible que el fisco pueda requerir documentación referida a operaciones realizadas en períodos fiscales posteriores a la fecha de prescripción del período al que se refieren, pero sólo en la medida en que se trate de una actuación administrativa realizada en el marco de una facultad de verificación que aún no se encuentre prescripta. La interpretación que propone el recurrente implica, como bien advirtió la Cámara,

una forma indirecta de hacer renacer una facultad de verificación o determinación fiscal que se encuentra prescripta por aplicación de otra norma del mismo ordenamiento tributario provincial. Esta circunstancia se deriva no sólo de la interpretación normativa que propone la recurrente, que prescinde por completo de lo dispuesto en el art. 54 del CTP, sino además de las consecuencias fácticas que se siguen de admitir la interpretación que la demandada propone respecto del art. 9 del CTP, puesto que implicaría dotar al fisco de la posibilidad de modificar indirectamente los alcances de una determinación tributaria respecto de la cual se predica simultáneamente la prescripción de la potestad de determinación fiscal, a tenor de lo dispuesto en el art. 54 del CTP” (CSJT, “María Ángela de Uña de Carletto e Hijos S.A. vs. Provincia de Tucumán - D.G.R. s/ Nulidad/Revocación”, sent. n° 720 del 24/5/2024).

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia n° 745 del 08/8/2023 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

3. Atento al resultado a que se arriba, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la recurrente vencida (cfr. arts. 89 CPA y 61, inc. 1°, CPCyC).

Por ello, y de conformidad con el dictamen del señor Ministro Fiscal, se RESUELVE: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia n° 745 del 08/8/2023 de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. II. COSTAS, como se consideran. III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

El señor Vocal doctor Daniel Leiva, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por la señora Vocal preopinante doctora Eleonora Rodríguez Campos, vota en idéntico sentido.

El señor Vocal doctor Antonio D. Estofán, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por la señora Vocal preopinante doctora Eleonora Rodríguez Campos, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios,

RESUELVE:

- I.- NO HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia n° 745 del 08 de agosto de 2023 de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
- II.- COSTAS**, como se consideran.
- III.- RESERVAR** pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER

SUSCRIPTA Y REGISTRADA POR LA ACTUARIA/O FIRMANTE EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN, EN LA FECHA INDICADA EN LA CONSTANCIA DE LA REFERIDA FIRMA DIGITAL DE LA ACTUARIA/O. **MEV**

NRO.SENT: 1146 - FECHA SENT: 02/09/2024

FIRMADO DIGITALMENTE
Certificado Digital:
CN=LEIVA Daniel, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20161768368, Fecha:27/08/2024;CN=ESTOFAN Antonio Daniel, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20080365749, Fecha:27/08/2024;CN=RODRIGUEZ CAMPOS Eleonora, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27264467875, Fecha:28/08/2024;CN=SBDAR Claudia Beatriz, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27142261885, Fecha:30/08/2024;CN=FORTE Claudia Maria, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 27166855859, Fecha:02/09/2024;
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>